



LECCIÓN 2. LOS RETOS Y TRANSFORMACIONES DEL ESTADO DEL BIENESTAR

A. OBJETIVOS PRINCIPALES.

- Caracterizar las diferentes modalidades del Estado Moderno: Estado absolutista, Estado liberal de Derecho, y Estado social o Estado de Bienestar.
- Conocer las causas y los procesos que describen y explican la transición de una a otra modalidad del Estado Moderno.
- Comprender los retos a los que se enfrenta el Estado de Bienestar.

B. CONTENIDOS BÁSICOS.

- La monarquía absolutista constituirá la primigenia expresión del Estado Moderno, e implicó un ejercicio arbitrario, discrecional y concentrado de las facultades propias de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al amparo legitimador de postulados teológicos-divinos (Bodino) o racionales (Hobbes). El Estado absolutista, frente a la poliarquía medieval, el Imperio y el Papado, afirmará en modo extremo la naturaleza patrimonial del poder, del que será titular un monarca investido de extraordinarios poderes, atribuidos en base a los caracteres con que se caracterizó la soberanía, y su carácter absoluto y perpetuo (Bodino), además de indivisible (Hobbes). Con carácter supremo, el monarca absoluto ejerce las atribuciones propias de “un poder incontrolado e irrefrenable y eso por dos motivos: 1) porque no existen, de hecho, contrapoderes suficientes para refrenarlo y/o porque 2) es legibus solutus, desvinculado de las leyes y superior a las leyes” (Sartori, 2007).
- El Estado liberal de Derecho surge como consecuencia de las demandas que logrará sintetizar el liberalismo, como reacción frente al Estado absolutista, todo lo cual acabará cristalizando, como forma de organización política en EEUU y Europa, durante los siglos XVIII y XIX, como afirmación frente a los excesos y arbitrios del Estado absolutista. Las revoluciones burguesas representan, en este contexto: “el acceso de las nuevas clases burguesas al poder del Estado, rompiéndose con el anterior predominio de la aristocracia terrateniente” (Vallespín, 2007).



- Como consecuencia del desarrollo capitalista e industrial, los grupos sociales emergentes que vendrán a detentar el poder económico y comercial, reivindicarán la adopción de medidas democratizadoras y representativas que permitan la designación de los cuerpos legislativos y las magistraturas ejecutivas. Así, se irá incluyendo, progresivamente, a espectros más amplios de la población, evolucionando desde el sufragio censitario (limitado por riqueza y propiedades), hasta el sufragio universal. De esta forma se sublima, en el entramado institucional del Estado liberal, la demanda frente al monarca de “no taxation without representation”, por medio de la cual, la burguesía capitalista, comercial e industrial, marcadamente urbana, vincula su contribución tributaria, esencial para el mantenimiento del Estado, a la representación política de sus demandas, intereses y postulados ideológicos. Se produce así el transcurso hacia el Estado Democrático de Derecho, en el que el Parlamento vendrá a ocupar, paulatinamente, mayores cotas de protagonismo en el entramado institucional del Estado, tal y como pondrán de manifiesto la gloriosa revolución inglesa (1688), la Revolución de Independencia norteamericana (1776), la Revolución Francesa (1789), así como las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 1848.
- En este contexto, el Estado, con la intención de transformar las instituciones a partir de una democratización parcial (sufragio censitario), somete y vincula el ejercicio del poder a determinados principios tales como: 1) El reconocimiento de determinados derechos civiles y libertades individuales, emanados de la dignidad humana, protegidos por un poder judicial independiente, y ligados a la propiedad privada, el pluralismo político, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, o el libre ejercicio del comercio y la empresa; 2) La separación de poderes (Locke, Montesquieu) y un sistema constitucional de relaciones interdependientes y de checks and balances entre las competencias, potestades y facultades de los mismos, como requisito para la garantía de los derechos individuales; 3) La celebración de comicios electorales para la composición de los órganos legislativos y ejecutivos; y, 4) El imperio de la ley y principio de legalidad de las Administraciones Públicas. La defensa de las libertades y de los derechos civiles y políticos, queda garantizada por medio de entramados institucionales que limitan los poderes, equilibrándolos, y sujetando la coerción pública a pesos y contrapesos que eviten la tiranía y la arbitrariedad en el ejercicio del poder. De ahí que cualquier excepcionalidad que implique una limitación, en distinto grado, en la garantía y el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades



públicas, quede detalladamente tasado y regulado constitucionalmente, tal y como sucede en los estados de alarma, sitio o excepción.

- Los efectos negativos de la industrialización capitalista provocarán, esencialmente, entre otros efectos, una insuficiencia salarial, generando enormes bolsas de pobreza, miseria, desigualdad y desprotección social y asistencial. Ello puso de manifiesto el necesario desarrollo de la democracia económica como garantía para la realización de la democracia política. Las externalidades negativas derivadas de las disfuncionalidades del mercado y su incapacidad para la asignación equitativa de bienes y servicios básicos, así como la brecha salarial y de clases, constituyen los fundamentos para la legitimación de la función social del Estado. Como consecuencia de las exigencias procedentes de los movimientos obreros ante tales circunstancias, el Estado articulará unas políticas sociales basadas en criterios de profesionalidad y universalidad, frente a las acciones asistenciales y de beneficencia a cargo de instituciones religiosas y obras pías. El cambio sustancial se produce ante el reconocimiento de unos derechos en el ámbito de la protección social, a cuyo cumplimiento queda vinculado el Estado. Los requerimientos de este modelo de Estado exigen: “1) Base constitucional adecuada; 2) Pacto político sobre el que sustentar el modelo de bienestar; 3) Estado regulador e intervencionista con fines de crecimiento económico y redistribución de rentas (además del pleno empleo como objetivo central)” (Gallego, 2007).
- El Estado social o Estado de Bienestar (welfare state) constituye el reconocimiento y la atribución de amplias funciones de intervención económica y social a cargo de las Administraciones Públicas, en orden a garantizar unos mínimos estándares de equidad y bienestar social, por medio de la planificación de la actividad económica, la redistribución de la riqueza y la intervención económica y social. Tales atribuciones se concretarán en atención a amplios catálogos de derechos económicos y sociales, constitucionalmente reconocidos, entre los que, con carácter básico, se enumeran la educación, la sanidad o la seguridad social. Junto con los propios servicios sociales, el Estado de Bienestar se articula mediante subvenciones y transferencias; a saber: prestaciones por accidente o desempleo, pensiones por incapacidad o vejez. Un elenco de políticas sociolaborales vertebran el ejercicio del Estado de Bienestar, por medio de políticas públicas de empleo, formación profesional, seguridad y salud



laborales, seguridad social, protección a la familia, juventud, discapacitados, personas de edad avanzada, inmigración, cohesión económica y social y contra la exclusión social (Sempere, 2003); así como sanidad, defensa y tecnología, o programas de asistencia social y redistribución de la renta (Stiglitz, 2000). Una de las actuales tendencias tiene que ver con el rango jurídico de los derechos de tercera generación, tales como los vinculados a la cultura, el medioambiente, el deporte o el derecho a una buena administración.

- La financiación del entramado institucional encargado de proveer los servicios sociales, se produce por medio de un sistema fiscal progresivo que, tras la Segunda Guerra Mundial, permitirá afrontar y realizar los objetivos prestacionales y redistributivos del Estado. Así, cabe identificar la imposición sobre beneficios de sociedades, sobre el consumo o sobre la riqueza (Rosen, 2008). Los principales impuestos son de carácter directo, sobre personas físicas o sociedades (IRPF, cotizaciones a la seguridad social, impuesto de sociedades, transmisiones patrimoniales o sobre el patrimonio); impuestos indirectos al consumo de bienes y servicios; aranceles aduaneros e impuestos sobre consumos específicos (Stiglitz, 2000).
- El Estado del Bienestar, se expresa básicamente mediante las tres modalidades expuestas por Sping-Andersen, y que resultan de las relaciones que se establecen entre el Estado, la sociedad y el mercado, en función del grado de cohesión y estructuración social a que el Estado contribuye; se trata de los modelos socialdemócrata, institucional o escandinavo; el conservador, corporatista o continental europeo; y, el liberal, residual o anglosajón. Estos a su vez constituyen modelos del sector público que, en diferentes tipos de relación con la familia, el mercado y el tercer sector “configuran el escenario de la provisión de servicios y del bienestar de un país” (Ballart & Ramió, 2000).
- Sometido a diferentes revisiones críticas, tanto ideológicas como pragmáticas, el Estado del Bienestar se enfrenta, más que cualquier otra modalidad de organización política, al relevante demanda de su eficacia en el ejercicio de sus funciones y la consecución de los fines atribuidos, como principales fuentes de legitimidad, a instancias de todos los actores sociales.



C. REFERENCIAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

- [Farge Collazos, C. \(2007\). “El Estado de bienestar”, en *Enfoques*, XIX, 1-2, págs. 45 – 54](#)
- [Velázquez Becerril, C. A. & Pérez Pérez, G. \(2010\). “Las transformaciones del Estado-nación en el contexto de la globalización”, en *Política y Cultura*, núm. 34, págs. 107 – 127.](#)